LEY 66 DE 1930

(DICIEMBRE 5)

“POR LA CUAL SE INCLUYEN LOS DISTRITOS DE RIO DE ORO Y GONZALEZ EN LA REBAJA DEL PRECIO DE LA SAL, Y SE DAN ALGUNAS AUTORIZACIONES AL GOBIERNO EN MATERIA DE SALINAS MARITIMAS”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º La autorización al Gobierno de que trata el artículo 4º de la Ley 56 de 1923, se hace extensiva a la sal que se destine al consumo de los Municipios de Río de Oro y González, en el Departamento del Magdalena.

Artículo 2º Queda en estos términos reformada la citada Ley 56 de 1923.

Artículo 3º Todo lo relacionado con el ramo de Salinas Marítimas puede ser atendido por el Gobierno Nacional, de conformidad con las autorizaciones conferidas por la Ley 18 de 1923 y el artículo 4º de la Ley 34 de 1928, sin que en ningún caso se exceda de las partidas apropiadas para dicha renta en cada vigencia.

Parágrafo. Las autorizaciones de que trata este artículo se hacen extensivas al ramo de Salinas Marítimas en el litoral pacífico, y en consecuencia el Gobierno podrá proveer lo conveniente sobre elaboración y manipulación de sal nacional y los demás servicios en dicho litoral, quedando en estos términos reformado el artículo 5º de la Ley 67 de 1924.

Artículo 4º Esta Ley comenzará a regir desde su sanción. Dada en Bogotá a tres de diciembre de mil novecientos treinta.

El Presidente del Senado,

RAFAEL TRUJILLO GOMEZ

El Presidente de la Cámara de Representantes,

JOSE CAMACHO CARREÑO

El Secretario del Senado,

Antonio Orduz Espinosa

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Fernando Restrepo Briceño

Poder Ejecutivo—Bogotá, diciembre 5 de 1930.

Publíquese y ejecútese.

ENRIQUE OLAYA HERRERA

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Francisco de P. PEREZ

MINISTERIO DE GOBIERNO**LEGISLACION PARA LOS INDIGENAS DE LA REGION DE URABA**

(CONSULTA Y RESOLUCION)

República de Colombia—Departamento de Antioquia—Juzgado 2º del Circuito. Frontino.

Al señor Ministro de Gobierno de la República.

El Juez 2º del Circuito de Frontino,

exhorta:

En la causa por heridas inferidas por el indígena Miguel Domicó a José Emilio del mismo apellido, que se adelanta en este Juzgado, a un memorial de pruebas presentado por el señor Félix A. Betancur, en su carácter de curador *ad litem* del mentado Miguel Domicó, recayó el auto que en su parte pertinente dice:

“Juzgado segundo del Circuito—Frontino, julio cuatro de mil novecientos treinta.

“Prevía citación de la parte contraria, practíquense las pruebas pedidas por el curador *ad litem* de Miguel Domicó, en el memorial de fecha de ayer, que antecede....

“Por conducto del Ministerio de Gobierno solicítense de la Presidencia de la República la información a que se con-

trae el capítulo II del pliego de pruebas....

“Notifíquese.

“Jesús Gómez González — Isaac Guisao, Secretario en propiedad.”

El informe solicitado por el señor Betancur y de que trata el auto que antecede, tomado del memorial de pruebas aludido, dice textualmente:

“...II. Que se oficie al señor Presidente de la República, o a su Ministro de Gobierno, para que extienda un informe sobre los puntos siguientes:

“1º Si se ha dictado por el Ejecutivo decreto reglamentario de la ‘Ley 72 de 1892, por la cual se dan autorizaciones al Poder Ejecutivo para establecer misiones católicas’;

“2º Si el Gobierno ha reglamentado de acuerdo con la autoridad eclesiástica todo lo conducente a la buena marcha de las misiones, y, especialmente, lo que atañe a la Misión dirigida por la Prefectura Apostólica de Urabá, a cargo de Religiosos Carmelitas Descalzos;

“3º Si se han delegado o nó a los mencionados Misioneros facultades extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal y judicial sobre los catecúmenos, respecto de los cuales está suspendida la

acción de las leyes (artículo 1º, Ley 89 de 1890); y

“4º Si algún individuo o grupo de individuos, de la Misión catequista de Urabá, ha sido declarado por el Poder Ejecutivo ‘en capacidad de ser gobernado por las leyes’ de la República; y si, caso de haberlo sido, esa declaratoria ha caído sobre mi pupilo, indígena y menor de edad, Miguel Domicó....”

“Frontino, julio 7 de 1930.

“El Juez 2º del Circuito, Jesús Gómez González—El Secretario, Isaac Guisao.”

Ministerio de Gobierno—Sección 1ª—Bogotá, septiembre 4 de 1930.

En atención al exhorto, procedente del Juzgado segundo del Circuito de Frontino, de fecha 7 de julio último, referente a la causa que por heridas se sigue en dicho Juzgado al indígena Miguel Domicó, el infrascrito Ministro de Gobierno informa:

I. El Gobierno Nacional ha dictado algunos decretos reglamentarios de la Ley 72 de 1892, como el 614 de 1918, referente al gobierno de los indígenas de la región del Vaupés, y el 1993 de 1927, sobre régimen de protección de indige-